

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	1
----------	--	---

RESOLUCIÓN N° 618
Buenos Aires, **13 DIC 2010**

VISTO el presente sumario en lo financiero N° 895, que tramita en el Expediente N° 100.290/97, dispuesto por Resolución de esta Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias N° 515 del 23.10.97 (fs. 715/16), de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras N° 21526 -con las modificaciones de las Leyes Nros. 24144 y 24485-, que se instruye para determinar la responsabilidad de las siguientes personas: Hugo Antonio PIRE, Victorio Humberto MONTEDORO, Juan Carlos PAPA, Juan CALLARAMI, Sergio Luis SZUCHMAN, Oscar Alfredo MURRI, Eduardo Luis TRAVERSO, Raúl STIZZA, Juan TOMAT, José QUAGLIA, José CASTRO, Luis LEGGERI, Augusto STRAPPA, Mario Carlos FLEGO, Esteban Enrique MARTÍN, Ricardo José CROCCO, Miguel Sebastián CAPRIDÍ, Francisco Orlando GULIAS y Carlos MARIANI, por su actuación en el BANCO DE LA RIBERA COOPERATIVO LIMITADO.

El Informe N° 591/F/33-97 del 10.09.97 (fs. 703/10), como así también los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones a fs. 1/702, que dieron sustento a las siguientes imputaciones:

Cargo 1: Inadecuada ponderación del riesgo crediticio mediando suministro de información distorsionada al BCRA relativa al estado de la cartera de créditos e insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad, en transgresión a la Ley 21.526, artículo 36, primer párrafo; a las Circulares OPRAC-1, Capítulo I, puntos 1.7 y 3.1, y CONAU-1, B. Manual de Cuentas, Códigos 131901 -Previsión por riesgos de incobrabilidad- y 530000 -Cargo por incobrabilidad-; y a las Comunicaciones "A" 2141, CONAU-1-132, "A" 2216, CONAU-1-147 y LISOL-1-84, Anexos I y II, y "A" 2218, CONAU-1-148, punto 6.1.2.2.2.

Cargo 2: Incumplimiento de disposiciones sobre capitales de las entidades financieras, en transgresión a la Ley 21526, artículos 32 y 36, primer párrafo; y a las Comunicaciones "A" 2136, LISOL-172, puntos 1.1, 3.2.1. y 3.2.5. y complementarias, y "A" 2180, LISOL-1-79 y CONAU-1-138, Anexo II (texto ordenado por Comunicación "A" 2216).

Las notificaciones efectuadas (fs. 718/39, 748/65 y 856), las vistas conferidas (fs. 740, 767/68, 770/72 y 776), y los descargos y prueba ofrecida por los sumariados (fs. 779, subfs. 1/4; 780, subfs. 1/34; 781, subfs. 1/2; 782, subfs. 1/14; 783, subfs. 1/35; 784, subfs. 1/2; 785, subfs. 1/5; 793, subfs. 1/13; 814, subfs. 1/12 y 855, subfs. 1/53).

El auto de apertura a prueba (fs. 862/66) con sus pertinentes notificaciones (fs. 867/82, fs. 885/88, fs. 892/99, fs. 901/05, fs. 908 y fs. 912), y el de cierre del período probatorio (fs. 948/49) con sus respectivas notificaciones (fs. 950/65, fs. 967/77, fs. 979/85, fs. 987/97 y fs. 999/1006), y

CONSIDERANDO: I - Que con carácter previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar las imputaciones de autos, los elementos probatorios que las avalan y la ubicación temporal de los hechos que las motivan.

I - Que cabe señalar que no se han efectuados imputaciones al Banco de la Ribera Coop. Ltda. en razón de que al ser oportunamente absorbido, junto con Aciso Banco Coop. Ltda., por el Banco Integrado Departamental Coop. Ltda., en virtud de la autorización conferida mediante Resolución N° 22 de fecha 20.01.95 del Directorio de este Banco Central, la misma estableció en su punto 12 lo siguiente: "Disponer que, a los fines del art. 41 de la Ley 21.526, no se afectará a la entidad que resulte de la fusión por sanciones que provengan de la gestión o actividades del Banco de la Ribera Cooperativo Limitado o del Aciso Banco Cooperativo Limitado, anteriores a la fecha de la presente. Ello sin perjuicio de su eventual aplicación a las personas físicas que pudieran ser responsables de las infracciones sancionadas por dicha disposición".

1.1 - Con fecha 17.10.94 se llevó a cabo una inspección en el Banco de la Ribera Coop. Ltda. que finalizó el 14.12.94, con fecha de estudio al 31.08.94, que abarcó también la información al 30.09.94,

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° Act.	100.290/97	52 3081
----------	-------------------------------	------------	---------

cuyas conclusiones finales constan en el Informe N° 521/306 del 19.01.96 (fs. 1/7, puntos 1.3.1/1.3.5.). A raíz de ello se formula el cargo 1 que reza: "Inadecuada ponderación del riesgo crediticio mediando suministro de información distorsionada al BCRA relativa al estado de la cartera de créditos e insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad", correspondiendo señalar que los hechos constitutivos de tal imputación se verificaron al 31.08.94 y al 30.09.94.

El presente cargo 1 consta de 4 facetas:

1.2 - La primera se verificó a raíz del otorgamiento de sucesivas renovaciones o nuevos desembolsos de créditos a deudores que no evidenciaban capacidad de pago, o respecto de los cuales no se constató la existencia de suficientes elementos de juicio que respaldaran las decisiones de los otorgamientos, observándose en varios casos que esas decisiones se ataron exclusivamente a la posibilidad de recupero de los créditos a través de la eventual liquidación de las garantías hipotecarias y/o prendarias constituidas a favor de la entidad (fs. 704).

En la situación descripta se encontraban las financiaciones a los siguientes deudores: Establecimiento El Oasis S.A. (fs. 145/47), Corrugados Santa Fe S.A. (fs. 280/308), Dav Publicidad S.R.L. (fs. 309), Gomila S.A. (fs. 310), Ser Salta S.A. (fs. 311/23), Transcot S.A. (fs. 324/49), Coop. Agrícola Ltda. La Argentina (fs. 350/85), Deyvi S.A. (fs. 386/432), Establecimiento Agrop. Virtudes S.A. (fs. 433/45) y Juliá Juan /fs. 446/55), acreditándose las irregularidades mediante las conclusiones efectuadas sobre cada uno de estos deudores tras el análisis de la cartera de créditos, cuyo detalle obra a fs. 70/8 (fs. 704).

1.2.1 - El Informe acusatorio destaca -en el caso específico del deudor Pueblo Antiguo S.A.-, que la deuda se originó en la financiación -mediante adelantos de fondos- para un proyecto de construcción de un edificio, a empresas vinculadas a este deudor que se cancelaron con financiación a dicha firma, en la oportunidad de constituir una garantía hipotecaria, a favor de la entidad sobre el bien en el que se iba a desarrollar el proyecto (fs. 704).

El Banco de la Ribera Coop. Ltda. no efectuó -no obstante la magnitud de la asistencia crediticia de Pueblo Antiguo S.A., por valor de \$ 1.295 miles a noviembre/94-, análisis de factibilidad ni de las fuentes de financiación necesarias para la finalización del proyecto, lo que resulta contrario a las normas de política crediticia que dicha entidad financiera debía acatar, pues se trataba de un proyecto a largo plazo por cifras millonarias dado que el valor estimado de realización de la obra concluida alcanzaba a \$ 16.827 miles (fs. 704).

Tampoco el Banco de la Ribera Coop. Ltda. conocía acabadamente quiénes eran los titulares de la firma que encabezaba el negocio -se sabe que era una empresa uruguaya respecto de la cual la entidad financiera desconocía quiénes eran sus accionistas (fs. 149/50)-, contando únicamente con la promesa de ser altamente rentable (fs. 704).

Asimismo, pudo verificarse que la aprobación del crédito a Pueblo Antiguo S.A., como así también el acuerdo de espera (del 30.06.94 al 30.11.94), no siguió los canales normales establecidos por la entidad, ya que las aprobaciones por parte de la Mesa Ejecutiva del Consejo de Administración no constan en el Libro de Actas correspondiente, habiendo pasado a conocimiento de la Comisión de Créditos con posterioridad a la firma de los mutuos hipotecarios (fs. 705).

Luce a fs. 148/49 un memorando explicativo de la operatoria referida, surgiendo del anexo de fs. 150/51 las relaciones entre todas las firmas integrantes del grupo Pueblo Antiguo S.A.; a fs. 153/279 corre la correspondiente documentación respaldatoria (fs. 705).

1.3 - La segunda faceta del cargo 1 se detectó a través del análisis de cartera mediante el cual se estableció la incorrecta clasificación de diversos deudores de naturaleza comercial y de consumo o vivienda, como así también respecto de las garantías recibidas (ver detalle y cuadros en Anexos II, III, IV y V, fs. 45/67), hechos que derivaron en un incremento significativo de provisiones por riesgo de incobrabilidad que alcanzó la suma de \$ 3.900 miles al 30.09.94 (fs. 705).

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	3 1082
----------	--	--	--------

El incremento de provisiones al 31.08.94 era de \$ 2.967 miles de los cuales \$ 166 miles correspondía contabilizar en forma inmediata y \$ 2.801 miles podían diferirse de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación "A" 2216, estableciéndose -en forma adicional, para la cartera comercial al 30.09.94, sobre la base de una muestra analizada- un incremento mínimo de provisiones por riesgo de incobrabilidad de \$ 933 miles de los cuales resultaban diferibles \$ 855 miles (fs. 38/9 y fs. 705).

Por lo tanto el aumento total de las provisiones era de \$ 3.900 miles (\$ 2.967 + \$ 933 miles), cifra que representaba el 25,3% de la integración del capital computable al 30.09.94, aunque de la misma sólo correspondía contabilizar en forma inmediata \$ 244 miles -\$ 166 miles más \$ 78 miles-, incluyéndose en la antedicha suma de \$ 3.900 miles la suma de \$ 1.329 miles correspondientes a la incorrecta clasificación de créditos de consumo o vivienda, principalmente, en el segmento de deudores que figuraban clasificados por la entidad como "de difícil recuperación" al cual se imputaron prestatarios con deudas que registraban atrasos superiores al año, con lo cual correspondía haberlos considerado en el segmento "Irrecuperables", conforme las disposiciones de la Comunicación "A" 2216 -Anexo I, punto II.5- (fs. 38/39). El análisis respectivo se efectuó sobre la base del inventario de dichos créditos obrante a fs. 81/144 (fs. 705).

Cabe señalar que el gerente general de la entidad conformó con su rúbrica, la mayor parte de las reclasificaciones indicadas por la inspección actuante, según surge de las constancias de fs. 70/80 y fs. 685, luciendo a fs. 33/34 los listados de "Principales deudores de las entidades financieras" originariamente informados por la entidad al 31.08.94 y 30.09.94. Además, del dictamen de la auditoría externa obrante a fs. 68/69 ya surgía la procedencia de incrementar las provisiones para riesgos de incobrabilidad de la cartera crediticia a los efectos de cumplimentar adecuadamente las normas de este Banco Central en la materia (fs. 705).

1.4 - La tercera faceta del cargo 1 consiste en la liquidación de operaciones crediticias a integrantes de un mismo grupo económico para cancelar -entre sí- obligaciones vigentes sin que disminuyera el nivel de endeudamiento del grupo, con la intención de soslayar las disposiciones de clasificación de deudores - Comunicación "A" 2216 y cc.- (fs. 705).

Dicho proceder tendía no sólo a mostrar situaciones de mejor calidad que las que reflejaban ciertos prestatarios sino también a dilatar en el tiempo el ejercicio de las acciones tendientes al recupero de las acreencias; en dicha situación se verificó el caso de los grupos económicos "Pueblo Antiguo", "Romero", "Deyvi", "Corrugados Santa Fe" y "Medina Werther", resultando todo ello corroborado mediante la documentación obrante a fs. 153/279, fs. 456/503, fs. 386/423, fs. 280/308 y fs. 504/537, respectivamente (fs. 705/6).

1.5 - La faceta cuarta del cargo 1 consistió en omitir declarar como conjuntos económicos a personas físicas y/o jurídicas integrantes de los mismos, a quienes se adjudicaban parte de los créditos adeudados por el prestatario principal, por sumas que no alcanzaban para ser expuestas entre las correspondientes a principales deudores (fs. 706).

Tal proceder tenía como finalidad disminuir la exposición de la concentración de riesgos por ser esa la condición necesaria requerida por este Banco central para la aprobación del plan de saneamiento oportunamente presentado por la entidad; como consecuencia de ello, la disminución de la concentración de la cartera que reflejaba la información, no era real, ya que no respondía a una verdadera recuperación de las acreencias (fs. 706).

La situación descripta fue determinada en relación a los siguientes grupos económicos: Grupo Pueblo Antiguo conformado por Pueblo Antiguo S.A., Erizo S.A., Sur S.A., Núcleo Litoral S.A., Boyas S.R.L. y Aries Cía. de Seguros S.A.; Grupo Carburando (fs. 538/58) conformado por Carburando S.A., Mundo Show S.R.L., Juan Carlos Rudoni, José María Davin y Juan José Angeli; Grupo Romero conformado por Tecnonea S.A., EABSA S.A., Editora Correntina S.A., Finda S.A. y Frusol S.A.; Grupo Corrugados Santa Fe conformado por Corrugados Santa Fe S.A. y Empaques Rosario S.R.L.; Grupo Medina Werther conformado por Medina Werther y Juan Méndez; y Grupo Deyvi conformado por Deyvi S.A. y Case S.R.L. (fs. 706). A fs.

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	4 5083
<p>530/37 obra el listado de información sobre grupos económicos declarado por la entidad -soporte magnético 4301- donde se ha destacado a los deudores que encabezaban tales grupos, respecto de los cuales en la penúltima columna aquella consignó "0", nomenclatura que correspondía sólo en caso de que el respectivo deudor no conformara un grupo económico (fs. 706).</p>			
<p>1.6 - En virtud de lo expuesto, y no habiendo allegado los prevenidos elementos aptos para desvirtuar la imputación formulada, cabe tener por acreditado al 31.08.94 y al 30.09.94 la inadecuada ponderación del riesgo crediticio mediando suministro de información distorsionada al BCRA relativa al estado de la cartera de créditos e insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad.</p>			
<p>2 - Que con respecto al incumplimiento de disposiciones sobre capitales de las entidades financieras, corresponde señalar que los hechos que lo constituyen se verificaron entre agosto y diciembre de 1994.</p>			
<p>2.1 - Del análisis del cumplimiento de las normas sobre capitales mínimos realizado por la inspección actuante para el período agosto/94 a noviembre/94, surgió que el sistema implementado por la entidad para determinar su posición en esta materia presentaba deficiencias, circunstancia que derivó en la necesidad de efectuar nuevos reprocesamientos de los listados utilizados para la determinación de la exigencia de capital mínimo, a efectos de aproximar la misma a la realidad (fs. 707).</p>			
<p>Los aspectos irregulares que sobre el particular determinó la inspección actuante, consistían en lo siguiente (fs. 2/3, punto 1.3.6.; fs. 35/37, punto 1. Capital, y Anexo I de fs. 42/44 y fs. 707/8):</p>			
<p>- No se atribuía a cada operación el indicador de riesgo normativamente indicado que le correspondía en función de la tasa de interés pactada, sino que en lugar de ello se determinaba, para cada línea de financiación y por cada sucursal, una tasa promedio en base a los intereses devengados en relación con el promedio de las financiaciones netas de los saldos inmovilizados; - Las operaciones cuyo devengamiento de intereses había sido suspendido se atribuían al indicador de menor riesgo, en lugar de aquél que le hubiera correspondido de acuerdo a la tasa pactada en cada caso; - Se consideraban las garantías otorgadas en el indicador de menor rango, sin que se asimilaran estas operaciones al indicador que normativamente correspondía en función de la mayor tasa pactada en operaciones con un mismo cliente; - En cuanto a "Otros créditos por intermediación financiera", se computaban en el indicador de riesgo "1" sin tener en cuenta la tasa pactada para cada operación; - Las provisiones por riesgo de incobrabilidad se deducían por prorrates simples sobre el total de la cartera, en lugar de ser afectadas específicamente a la operación que, en cada caso, le había dado origen; - Con excepción de los créditos prendarios e hipotecarios para la vivienda, se adoptaba similar criterio al precedentemente descripto para la asignación de garantías preferidas (prorrato), produciéndose como resultado de dicho proceder graves distorsiones, tales como, asignar garantías preferidas a líneas crediticias con importante volumen de operaciones y tasas elevadas (por ejemplo, tarjetas de crédito y descubiertos en cuenta corriente), las cuales en su mayor parte -dada su naturaleza- no contaban con cobertura de garantías de ese tipo.</p>			
<p>Destaca el informe acusatorio que a raíz de la omisión de declarar los defectos de capital mínimo que surgieron como consecuencia de las irregularidades "ut supra" descriptas, la entidad evitó indebidamente el pago de los cargos que hubiera correspondido por tales defectos (punto 3.2.5. de la Comunicación "A" 2236).</p>			
<p>Asimismo, considerando que el punto 3.2.1. de la citada norma prohibía el crecimiento de los depósitos y demás obligaciones por intermediación financiera a partir del mes siguiente al que se incurrió el defecto de capital mínimo, la entidad también evitó indebidamente el pago de cargos originados en el crecimiento de dichos rubros durante el período septiembre - noviembre/94 (fs. 36/37 y fs. 708).</p>			
<p>Para arribar a las conclusiones señaladas y acreditar las irregularidades descriptas, se tuvo en cuenta la Posición de capital mínimo a agosto/94 (fs. 564); el reprocesamiento de las exigencias de capitales mínimos para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1994 (fs. 565/676); el Memorando de control interno contable cursado por el auditor externo (fs. 677/79); el Informe del auditor externo de la entidad sobre el cumplimiento de las normas sobre capitales mínimos (fs. 680/02); el Informe del auditor externo sobre</p>			

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° Act.	100.290/97	155 5084
----------	-------------------------------	------------	----------

situaciones que impliquen cargos a favor del BCRA no contabilizados por la entidad, entre los cuales constan los relacionados con los defectos incurridos en materia de capitales mínimos para los meses de septiembre a diciembre/94 (fs. 683/84 y fs. 708).

2.2 - En virtud de lo expuesto, y no habiendo allegado los prevenidos elementos aptos para desvirtuar la imputación formulada, cabe tener por acreditado entre agosto y diciembre de 1994 el incumplimiento de disposiciones sobre capitales de las entidades financieras.

3 - Que, conforme a lo expuesto en el precedente Considerando I ha quedado acreditada la ocurrencia de los hechos infraccionales, por lo que procede realizar a continuación el análisis de los descargos y la eventual atribución de responsabilidad.

II - Sergio Luis SZUCHMAN (Consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva y Comisión de Créditos).

1 - Que el sumariado a quien se le imputan los hechos configurantes de los cargos 1 y 2 que motivan el presente sumario, dedujo descargo a fs. 779, subfs. 1/4.

En el mismo destaca que dentro de la entidad cooperativa actuaban dos grupos diferenciados, uno técnico profesional que manejaba lo relativo a la ponderación de riesgo ante cada solicitud de crédito y otro "de simple acompañamiento" que confiaba plenamente en el anterior, añadiendo que él formaba parte del segundo grupo y que siendo un mero consejero sin conocimientos técnicos no se puede pretender que conociera la normativa financiera emanada de este BCRA. Agrega, además, que sólo una vez concurrió a las reuniones del Consejo de Administración dado que se domiciliaba en San Pedro.

2 - Que los argumentos sobre su desempeño dentro del Consejo de Administración del Banco de la Ribera Coop. Ltda. versan en el desconocimiento de la normativa emanada de este BCRA, justificando su actuación como "mero" consejero sin versación en temas técnicos y su falta de participación a las reuniones del órgano directivo en razón del lugar de residencia. Todo ello constituye la lisa y llana confesión de estar ocupando una función como consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva y de la Comisión de Créditos para la cual no se hallaba capacitado y, asimismo, la total aceptación del incumplimiento de las obligaciones y deberes que le competían como integrante del órgano de dirección de una entidad financiera.

En razón de ello cabe formular la reflexión de que, si realmente carecía de todo tipo de conocimientos sobre la actividad financiera, lo más atinado hubiera sido no haber aceptado los cargos desempeñados, a fin de sustraerse de las consecuencias que ahora debe afrontar. Al respecto cabe traer a colación que la jurisprudencia ha sostenido que "... en cuanto a la falta de idoneidad en materia financiera de los médicos, comerciantes, maestros, etc., que asumieron la conducción de la entidad, argüida como defensa, constituye un aspecto que cada cual debió examinar antes de asumir las complejas y delicadas funciones directivas y de contralor que deben llevarse a cabo..., doctrina que es válida para todo tipo de entidad financiera como así también para las autoridades que en ellas se desempeñen" (Cfr.: Cám. Nac. de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 2, sentencia del 30.9.83, causa N° 4105 -autos "BANCO OBERA COOP. LTDO. s/ sumario a la entidad y personas físicas c/ Resolución 171/82 del Banco Central de la República Argentina").

Sus dichos con relación a su escasa participación en las reuniones del Consejo de Administración carecen de eficacia exculpatoria, dado que los hechos reprochados bajo los cargos 1 y 2 consisten en el otorgamiento de préstamos por valor de \$ 1.335 miles que implicaron una inadecuada ponderación del riesgo crediticio, en incumplimientos de la norma de clasificación de deudores de la cartera comercial y de consumo o vivienda, que implicaron incremento de provisiones por riesgo de incobrabilidad por la suma de \$ 3.900 miles, en el ocultamiento de operaciones crediticias de integrantes de conjuntos económicos para soslayar las normas de clasificación de deudores y en la omisión de declarar como conjuntos económicos a personas que efectivamente los integraban, para disminuir la concentración de riesgos en los principales deudores, tal como lo requería este Banco Central para aprobar el plan de saneamiento presentado por la entidad financiera, todo lo cual implicó suministrar información distorsionada a este Ente Rector, cabiendo añadir también incumplimientos de las normas sobre capitales mínimos.

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	6 1085
<p>En cuanto a la amplia responsabilidad que le competía, cabe tener en cuenta que la Mesa Ejecutiva (compuesta por un Presidente, un Secretario y el Tesorero del H. Consejo y otros cuatro Consejeros más que el H. Consejo elegía anualmente entre sus miembros), tenía entre sus funciones a las siguientes: "1 - Estar permanentemente interiorizado de la marcha del Banco y de sus problemas. 2 - Realizar visitas periódicas a todas las Casas del Banco. 3 - Tratamiento y resolución de los despachos recibidos de las Comisiones de Trabajo. 4 - Tratamiento y resolución de otros temas de urgencia y preparación de los temas que serán tratados por el H. Consejo. 5 - Adopción de Resoluciones en todos los casos, ad-referendum del H. Consejo. 6 - Designar un representante ante el I.M.F.C." (ver acta N° 1 de reunión de la Mesa Ejecutiva del Banco de la Ribera Coop. Ltda., fs. 22).</p> <p>A su vez, el Consejo de Administración debía vigilar la marcha de los negocios que encaraba la entidad financiera y, precisamente, las irregularidades sólo pudieron llevarse a cabo por haber mediado una suerte de delegación rayana en una prescindencia negligente tal como se desprende de sus propios dichos, dado que no es dable suponer que las transgresiones hubieran pasado desapercibidas de haber actuado el sumariado con la diligencia propia e insita en las funciones a su cargo, con la cual -además- hubiera podido adoptar o propugnar los recaudos para su corrección.</p> <p>Todo ello no permite relevarlo de responsabilidad, aunque intente minimizar su función como consejero titular aduciendo que estuvo a su cargo una tarea de acompañamiento del grupo técnico profesional, siendo que nada acredita que orgánicamente la distribución de tareas haya significado que quedaban los consejeros ajenos al seguimiento de los negocios propios de la actividad bancaria.</p> <p>En consecuencia y no resultando del expediente la existencia de alguna situación subalterna, la consideración del sumariado debe ser medida a la luz de las atribuciones, roles y facultades de cualquier miembro del Consejo de Administración.</p> <p>3 - Que, por todo lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al señor Sergio Luis SZUCHMAN por los cargos 1 y 2.</p> <p>III - Juan Luis TOMAT (Consejero titular e integrante de la Comisión Comercial).</p> <p>1 - Que al sumariado cuyo descargo luce a fs. 780, subfs. 1/3, se le imputan los hechos que configuran los cargos 1 y 2.</p> <p>En el mismo manifiesta que nunca integró la Comisión de Créditos sino que intervino en la Comisión Comercial, razón por la cual entiende que debería ser excluido del presente sumario dado que interpreta que sólo se incluyó a quienes actuaron en la Mesa Ejecutiva, en la Comisión de Créditos y como Síndicos titulares. Deja planteada la cuestión constitucional.</p> <p>2 - Que sus dichos acerca de que no debe formularse cargos por no haber actuado en la Mesa Ejecutiva ni en la Comisión de Créditos, ni haberse desempeñado como síndico titular, carece de todo sustento, dado que del Informe N° 591/F/33-96 que forma parte integrante de la Resolución del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias N° 515 del 23.10.97 surge que "... el ejercicio de la acción debería dirigirse contra los miembros titulares del Consejo de Administración ..." (punto III. SUJETOS DEL SUMARIO, fs. 709).</p> <p>Asiste razón al sumariado pues surge de la documentación agregada a fs. 780, subfs. 31/4 que en la reunión de la Mesa Ejecutiva del Consejo de Administración del Banco de la Ribera Coop. Ltda. de fecha 13.04.93, se solicitaron cambios en las comisiones de trabajo en virtud de los cuales el señor Tomat aparece pasando de la Comisión de Créditos a la Comercial.</p> <p>Ahora bien, corresponde destacar que la consumación de los hechos antirreglamentarios imputados bajo los cargos 1 y 2 no han sido ajenos al área de supervisión del Consejo de Administración de la entidad bancaria, por lo que la integración del sumariado en la Comisión Comercial no lo exime de los deberes</p>			

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° Act.	100.290/97	7 4086
----------	-------------------------------	------------	--------

que le competían en tanto miembro del órgano directivo y, en tal carácter, estaba legalmente habilitado tanto para promover los controles de su actividad, cuanto para ejercer una razonable verificación del legal funcionamiento de la misma. El haber declinado u omitido ejercer esas facultades que le competían lo hace incurrir en responsabilidad, pues esa conducta se convirtió a su vez en un incumplimiento de los deberes inherentes a su función.

No existe duda que con un mínimo de diligencia inherente a la función desempeñada hubiera sido suficiente para realizar la prevención o, en su caso, la rectificación de las faltas incriminadas, por lo que la responsabilidad del sumariado frente a las irregularidades imputadas tiene sustento en la omisión de los deberes propios del rol, toda vez que se ha encontrado objetable el ejercicio de la función desempeñada.

Resulta oportuno recordar lo manifestado por la jurisprudencia al entender que "... las personas o entidades regidas por la ley de Entidades Financieras conocen de antemano que se hallan sujetas al poder de policía financiero y bancario del Banco Central, y que es la naturaleza de la actividad y su importancia económica-social la que justifica el grado de rigor con que debe ponderarse el comportamiento de quienes tienen definidas obligaciones e incumbencias en la dirección y fiscalización de los entes financieros ..." (Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re "Hamburgo", sentencia del 8.9.92).

No corresponde a esta instancia expedirse sobre la cuestión constitucional planteada.

3 - Prueba: documental acompañada (fs. 780, subfs. 4/34) y la citada a fs. 780, subfs. 2 vta., punto VII, subpunto b, fue convenientemente evaluada. La informativa ofrecida a fs. 780, subfs. 2 vta., punto VII, subpunto a, fue proveída favorablemente a fs. 863, punto 6, subpuntos a, segundo párrafo, la que se tuvo por imposible de producir luego de infructuosas gestiones realizadas (ver fs. 941/2 y fs. 948); no obstante, esta situación resulta indiferente a los fines de autos, dado que no se niega autenticidad al acta N° 403 de reunión de la Mesa Ejecutiva del Consejo de Administración, de fecha 13.04.93, acompañado a fs. 780, subfs. 31/34 junto con su defensa. La pericial caligráfica ofrecida a fs. 780, subfs. 2, punto VII, subpunto c, se la tuvo presente en forma subsidiaria pero resulta indiferente a los fines de autos por no existir duda de que no integró la Comisión de Créditos. En cuanto a la prueba ofrecida a fs. 941, subfs. 2 y subfs. 21/29 la misma fue rechazada en el auto de cierre de prueba (fs. 948, cuarto considerando) por los motivos allí expuestos, a los que cabe remitir en honor a la brevedad.

4 - Que, por todo lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al señor Juan Luis TOMAT por las los cargos 1 y 2.

IV - Hugo Antonio PIRE (Presidente del Consejo de Administración e integrante de la Mesa Ejecutiva y del Comité de Presidencia).

1 - Que al sumariado, quien presentó descargo a fs. 781, subfs. 1/2, se le imputan los hechos configurantes de los cargos 1 y 2 objeto del presente sumario.

Plantea respecto del riesgo crediticio que se cumplieron todos los pasos requeridos por el proceso interno, así como análisis técnicos y dictámenes de la Comisión de Créditos y resolución de la Mesa Ejecutiva o Consejo de Administración en su caso, a la vez que alega que los créditos cuestionados -salvo Pueblo Antiguo S.A.- correspondían a clientes que operaban desde hacía mucho tiempo con la entidad, refiriendo también al contexto económico y a los casos de desastres naturales que alteraron la situación de los deudores involucrados en vistas de lo cual la entidad bancaria procuró en todos los casos mejorar las garantías y hasta logró la cesión de algunos activos para reducir la deuda. Añade que lejos de pensar que de esta manera se ponía en riesgo el patrimonio del banco, se actuó con el fin de asegurar el resguardo de esos créditos dentro de las normativas de este Banco Central.

En lo que respecta a la constitución de previsiones manifiesta tener "entendido que se cumplimentó lo sugerido por la inspección del BCRA" (fs. 781, subfs. 1), haciendo alusión al caso de Pueblo Antiguo S.A. destaca que en virtud del monto de la financiación "... el tema fue tratado por la Mesa Ejecutiva

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	8 108
----------	--	--	-------

y/o Consejo de Administración en cuyo seno participaban miembros de la Comisión de Créditos, se tuvo en cuenta la importante valoración del inmueble hipotecado superior a los \$ 9.000.000 ...", aclarando por ello que la entidad no iba a financiar la totalidad del proyecto "... sino que dicho financiamiento iba a estar a cargo del Banco Hipotecario Nacional ante quien se habían iniciado gestiones al respecto ..." (fs. 781, subfs. 1).

En materia de clasificación de deudores y de capitales mínimos expone que no se transgredió la normativa emanada de este Ente Rector, y que en el caso de este último tema no recuerda haber recibido instrucciones al respecto por parte de la auditoría externa, como así tampoco haber tenido objeciones de los funcionarios intervinientes en las inspecciones efectuadas en la ex entidad durante los años 1992, 1993 y 1994.

2 - Que el argumento inherente al cumplimiento de los procedimientos internos en materia de riesgo crediticio, como también a que se trataba de clientes de la entidad de larga data, carece de virtualidad exculpatoria, por cuanto tales circunstancias no le quitan ilicitud a los hechos reprochados, no pudiendo tampoco aceptarse tal planteo de parte de quien ocupaba cargos de envergadura como los desempeñados por el sumariado (Presidente del Consejo de Administración, integrante de la Mesa Ejecutiva y del Comité de Presidencia).

Tampoco puede aceptarse como eximente de responsabilidad que el sumariado alegue en forma imprecisa tener "entendido" que se dio cumplimiento a lo sugerido por la inspección actuante en la entidad bancaria, toda vez que de tales manifestaciones se desprende que el prevenido no agotó su cometido sino que más bien sumió su labor en una pasividad que ha menester reprochar, máxime si se tienen en cuenta que los proceder antinormativos reprochados originaron al 30.09.94 un significativo incremento de provisiones por riesgo de incobrabilidad por valor de \$ 3.900 miles, que la entidad bancaria omitió contabilizar.

Inherente al crédito al cliente Pueblo Antiguo S.A. cabe estarse por su elocuencia a lo manifestado a fs. 149: "En los antecedentes de los legajos no consta que el Banco de la Ribera haya efectuado una análisis de la factibilidad del proyecto y de las fuentes de financiación necesarias para su finalización. La entidad dice desconocer quienes son los accionistas de PUEBLO ANTIGUO y que la cabeza visible que les propuso la operación fue el Sr. José Antonio Iglesias ... en su carácter de apoderado de dicha firma). No obstante la falta de elementos de análisis mencionada, la entidad manifestó que el crédito a PUEBLO ANTIGUO fue otorgado en la confianza de que la construcción se financiaría con una asistencia del Banco Hipotecario Nacional, conforme les manifestara el Sr. Iglesias. No parece verosímil que el banco se involucre en un proyecto de largo plazo por cifras millonarias sin saber acabadamente quienes son los propietarios de la empresa que encabeza el negocio (PUEBLO ANTIGUO), desconociendo además cuales serían las fuentes de financiación ciertas, indispensables para la concreción del proyecto, aún cuando se trate de un negocio que promete ser altamente rentable y cuente con una garantía preferida con amplio margen de cobertura. A lo expuesto cabe agregar: - La aprobación del crédito a PUEBLO ANTIGUO, como así también el acuerdo de espera (del 30.06.94 al 30.11.94) no siguió los canales normales establecidos por la entidad, ya que las aprobaciones por parte de la mesa ejecutiva del consejo de administración no constan en el libro de actas correspondiente, habiendo pasado a conocimiento de la Comisión de Créditos con posterioridad a la firma de los mutuos hipotecarios. - Con fecha 6.12.94 la entidad intimó por carta documento al pago de las operaciones garantizadas con certificados de plazo fijo de ARIES C.S.S.A., manifestando que procedería a la ejecución de dichas garantías".

Con relación al tema capitales mínimos, el sumariado no aporta elementos que permitan exonerarlo de responsabilidad, limitándose a manifestar que no recordaba haber recibido instrucciones al respecto por parte de la Auditoría Externa y no haber tenido objeciones al respecto por otras inspecciones.

Teniendo en cuenta la naturaleza y entidad de las cuatro facetas constitutivas del ilícito 1 y del cargo 2 y las funciones desempeñadas por el inculpado (Presidente del Consejo de Administración e integrante de la Mesa Ejecutiva y del Comité de Presidencia), éste se encontraba en condiciones de detectar e impedir las anomalías verificadas, por lo que no hay justificación legal que permita excusar el incumplimiento a las normas emanadas de este Banco Central. No resulta admisible que el inculpado asumiera una actitud sin siquiera requerir información, frente a operaciones que para quien se desempeñara diligentemente en las actividades a su cargo debían ofrecer dudas sobre su ilicitud; al contrario, existe la plena convicción de que

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° Act.	100.290/97	1088
----------	-------------------------------	------------	------

estando legalmente habilitado para conocer las irregularidades acaecidas y adoptar los recaudos indispensables, el prevenido facilitó la comisión de los hechos reprochados.

En lo atinente a la responsabilidad que le cabe a los sumariados que desempeñan funciones directivas en una entidad financiera procede recordar lo sentado por la jurisprudencia: "... De ello resulta que el banquero, administrador de fondos ajenos y protagonista de una actividad que gravita de manera extraordinaria en la vida nacional, debe guardar prudencia en sus negocios, evitando crear riesgos innecesarios que puedan llevar a la entidad a una situación que le impida cumplir con sus obligaciones..." (Banco Coopereste Coop. Ltda s/ apel. Resol N° 420/87 del B.C.R.A.).

3 - Que, por todo lo expuesto, cabe atribuirle responsabilidad al señor Hugo Antonio PIRE por los cargos 1 y 2.

V - Victorio Humberto MONTEDORO (Consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva y Comisión de Créditos) y **Carlos Alberto MARIANI** (integrante del Comité de Presidencia y Gerente General).

1 - Que a los sumariados del título, cuyos descargos obran a fs. 782, subfs. 1/14 y fs. 783, subfs. 1/34, respectivamente, se les imputan los cargos 1 y 2. El nombre correcto del primero de los nombrados es como figura en el título, el cual surge de la certificación obrante a fs. 782, subfs. 14. Sus situaciones se analizarán en forma conjunta en razón de existir idénticos argumentos en sus defensas, añadiendo el señor Mariani a su defensa un detallado análisis -en forma de Anexo-, sobre cada una de las conductas imputadas (fs. 783, subfs. 15/34) al cual efectúa expresa adhesión el señor Montedoro; dicho tratamiento no empece a que se particularicen las situaciones que hagan a cada caso.

2 - Que en lo atinente a la inadecuada ponderación del riesgo crediticio, manifiestan que la mayoría de los casos imputados correspondían a préstamos preexistentes relacionados con empresas que operaban desde hacía años con la entidad y que al momento de recibir los créditos cumplían adecuadamente con todos los requisitos para su otorgamiento, destacando, además, que dichas empresas fueron objeto de un exhaustivo seguimiento cuando comenzaron a atravesar dificultades financieras.

Exponen a continuación que el Banco de la Ribera Coop. Ltda. actuó en todo momento en concordancia con la normativa relativa a la clasificación de deudores dado que contaba con un sector específico constituido por profesionales idóneos; con respecto a la omisión de declarar conjuntos económicos señalan que tal tarea se encontraba a cargo del citado sector técnico, y que todos los casos fueron transcritos en las informaciones suministradas a este BCRA.

Con referencia a las imputadas diferencias en la constitución de provisiones, indican que la magnitud de las mismas representaba menos del 1,5 % del capital computable, el 0,2 % de la cartera activa de la entidad y el 0,15 % del total de activos, por lo que destacan su escasa relevancia, sosteniendo también que resulta inexacto que el Banco de la Ribera Coop. Ltda. haya incumplido las disposiciones en materia de capitales mínimos, ya que había adaptado sus sistemas al nuevo procedimiento de cálculo y, además, las inspecciones actuantes durante 1992 y 1993 no efectuaron objeción alguna al respecto.

Hacen especial hincapié en no haber incurrido en ninguna transgresión legal y que el difícil contexto y los constantes y complejos cambios normativos, fueron los que pudieron dar lugar a alguna incorrecta interpretación de hechos o circunstancias, hasta dar lugar al desliz de involuntarios errores, destacando que con las conductas imputadas no se generó beneficio o provecho alguno para terceros. Aluden con relación a la firma Pueblo Antiguo S.A. que la adecuada información recogida por la entidad, la garantía hipotecaria que respaldaba la acreencia y el conocimiento de sus representantes legales, permiten demostrar que no existió riesgo alguno en la operatoria.

2.1 - El señor Mariani -en un escrito anexo a la defensa deducida, al que adhiere -como quedó dicho- el señor Montedoro, analiza casos puntuales respecto al otorgamiento de créditos a deudores que no evidenciaban capacidad de pago, para luego concluir, a modo general, que se trataron de financiamientos

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	10 1089
<p>concedidos en épocas muy anteriores a la fecha de análisis de la inspección y que siempre se garantizaron adecuadamente los recuperos, refiriéndose luego a los cambios en la economía nacional y regional como así también a los inconvenientes climáticos que azotaron la región.</p>			
<p>También hace alusión al caso Pueblo Antiguo S.A. manifestando que si bien se trataba de un prestatario nuevo, se tuvo en cuenta la ubicación estratégica del complejo edilicio, el análisis de mercado realizado y el conocimiento de la potencialidad del proyecto que funcionarios y directivos de la entidad tenían sobre el mismo. Asimismo destaca que, dado el monto del financiamiento, la decisión fue adoptada por el Consejo de Administración y comunicada por éste a la Comisión de Créditos, quien no formuló objeciones. Con respecto a la clasificación de deudores e incremento de provisiones, indica que la entidad contaba con un sector técnico específico y que cualquier diferencia con el criterio de la inspección pudo tratarse de un error en la apreciación de la situación de algunos deudores.</p>			
<p>Niega intencionalidad en la liquidación de operaciones crediticias a integrantes de un mismo grupo económico como así también que se haya omitido declarar como conjunto económico a personas integrantes de los mismos para obtener la aprobación del plan de saneamiento presentado, ya que la entidad no debía cumplir con ninguna meta concreta en materia de concentración de deudores a los efectos de que se considerara saneada su situación. Finalmente, desmiente la conducta imputada mediante el Cargo 2 con los mismos argumentos vertidos en su descargo.</p>			
<p>3 - Que en materia de riesgo crediticio se formulan alegaciones relacionadas con la antigüedad de la relación entre la entidad y las empresas beneficiarias de los préstamos, y el cumplimiento de los requisitos necesarios en el momento del otorgamiento crediticio. Las mismas no resultan aptas para revertir las imputaciones efectuadas por la inspección actuante, ya que ésta detectó que se efectuaban sucesivas refinanciaciones o nuevos desembolsos a deudores sin la existencia de elementos que respaldaran las decisiones de otorgamiento, acreditándose incumplimientos en el tratamiento crediticio de por lo menos más de una decena de clientes (ver fs. 145/7 y fs. 280/455).</p>			
<p>Lo argüido con relación a que la declaración de conjuntos económicos se encontraba a cargo de un sector específico el que estaba constituido por profesionales idóneos, no constituye mengua alguna a la comisión de la irregularidad cabiendo recordar que las obligaciones y responsabilidades de los consejeros no se modifican por la existencia de un comité ejecutivo o mesa directiva (art. 71 de la Ley 20337).</p>			
<p>Tampoco constituye argumento que permita justificar la falta imputada la supuesta irrelevancia de las diferencias en la constitución de provisiones por riesgo de incobrabilidad imputadas, ya que si bien la magnitud de la infracción será evaluada en el momento de la graduación de sanción que pudiere corresponderles, su comisión no puede aceptarse toda vez que la conducta reprochada efectivamente infringió disposiciones reglamentarias que debían acatar escrupulosamente todos los integrantes del sistema financiero.</p>			
<p>Aunque la entidad hubiera adaptado sus sistemas al nuevo procedimiento de cálculo en materia de capitales mínimos, esto no resta importancia a las deficiencias detectadas en su implementación, las que derivaron en la necesidad de efectuar nuevos reprocesamientos de los listados utilizados, no resultando tampoco relevante que las inspecciones actuantes durante 1992 y 1993 no hubieran efectuado objeciones al respecto, ya que al considerar otro período de actuación carece de incidencia las conductas desplegadas en el pasado.</p>			
<p>No resulta eximente de responsabilidad el hecho de que las infracciones imputadas no hayan generado algún tipo de beneficio, situación que de ser cierta influye significativamente en la atenuación de responsabilidad atribuible, pero que en modo alguno resulta determinante para la exoneración de la misma.</p>			
<p>3.1 - En materia de créditos, el hecho de que se tratara de financiamientos concedidos con mucha anterioridad a la fecha de inspección, no desvirtúa la imputación consistente en la concesión crediticia sin contar con los elementos de juicio que respaldaran la decisión de otorgarlos, la cual en muchos casos sólo se fundó en la posibilidad de recupero a través de la eventual liquidación de las garantías hipotecarias y prendarias.</p>			

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	11/09/98
----------	--	--	----------

No puede aceptarse que se atribuya la incorrecta clasificación de deudores a un error de apreciación, considerando que la misma surgió del análisis de cartera realizado respecto de diversos deudores de naturaleza comercial y de consumo o vivienda como también respecto de las garantías recibidas, hechos que derivaron en un incremento de las provisiones por \$ 3.900 miles, importe que representaba el 25,3 % de la integración del capital computable al 30.09.94.

La alegada circunstancia del conocimiento que funcionarios y directivos del Banco de la Ribera Coop. Ltda. tenían respecto de la potencialidad del proyecto que llevó al otorgamiento del crédito concedido a Pueblo Antiguo S.A., carece de eficacia exculpatoria, puesto que no surgen evidencias de que se hubiera efectuado un análisis de factibilidad ni de las fuentes de financiación necesarias para la finalización del proyecto, extrayéndose del Memorandum de fecha 09.12.94 (fs. 148/9) y de la documentación obrante a fs. 148/52, las peculiares características de dicha asistencia crediticia.

En el caso del cliente Pueblo Antiguo S.A. corresponde dejar sentado que se financió el proyecto de construcción de un edificio, con la sola promesa de ser éste altamente rentable, el cual fue materializado a través de adelantos de fondos a empresas vinculadas a esta sociedad, cancelados con una crédito a largo plazo con garantía hipotecaria a favor de la entidad sobre el bien en el que se iba a desarrollar el proyecto. Por lo tanto, resulta totalmente reprochable dada la magnitud de la asistencia crediticia -\$1.295 miles- al 31.08.94 (fs. 150), que no se conocieran acabadamente los integrantes de la firma que encabezaba el negocio, que no se hubieran efectuado análisis de factibilidad, como así tampoco que no se contara con las fuentes de financiación para la finalización del proyecto.

A mayor abundamiento cabe reparar en lo expresado por la inspección actuante en la entidad bancaria al 31.05.93, sobre política de crédito seguida por la entidad bancaria: "a) Si bien se concedieron financiaciones o refinanciaciones con una buena proporción de garantías preferidas, las mismas se hicieron a costa de otorgar amplios plazos de pago (1 a 7 años), debiéndose señalar que los prestatarios involucrados no evidencian capacidad de pago y suficiente respaldo patrimonial. b) Las sumas de las deudas involucradas insumen importantes magnitudes de la cartera de préstamos y del patrimonio del banco. c) Para la mayoría de los deudores asistidos o refinanciados no se contaba con los elementos de análisis que permitieran establecer la conveniencia de los apoyos crediticios concedidos ..." (ver fs. 946, subfs. 20).

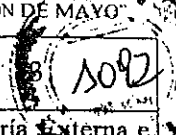
La jurisprudencia ha tenido ocasión de referirse al tema que trata el presente ilícito y ha expresado: "... La administración del crédito importa uno de los sectores más importantes dentro de la actividad bancaria, razón por la cual su gobierno está sujeto a reglas y normas rígidas que tienden a que la Entidad no vea alterada su fluidez operativa y, por ende, su encuadramiento dentro del sistema. Esto lleva a que la empresa bancaria -y el banquero- deban extremar su cuidado en lo que hace al análisis de los elementos que conforman las ideas de riesgos del crédito ..." (Cám. Nac. Apel. Cont. Admin. Fed., Sala III. Causa 7129, "Pérez Alvarez, Mario A. c/Resol. 402/83 Banco Central de la República Argentina - Expte. 100.392/80, Banco Delta S.A."; considerando VI; Sentencia del 4 de julio de 1986).

En lo que atañe a la falta de intencionalidad en la liquidación de operaciones crediticias a integrantes de un mismo grupo económico y a que se haya omitido declarar como conjuntos económicos a personas integrantes de los mismos, tampoco puede sostenerse como eximente de responsabilidad, resultando oportuno recordar que la jurisprudencia ha dejado sentado que la responsabilidad se genera por la mera constatación de faltas, resultando indiferente la existencia de dolo.

4 - Que el desempeño del señor Montedoro dentro del Consejo de Administración revela una actitud negligente que le acarrea responsabilidades en base a las consideraciones formuladas en el punto 2 del Considerando II y a la jurisprudencia citada en el punto 2 del Considerando III, a los que corresponde remitir.

4.1 - En cuanto al alcance de las funciones del señor Mariani como Gerente General, cabe manifestar que el tema fue analizado por la justicia quien expresó que "... la actuación que les cabe a los gerentes asume una importancia y características singulares. Tan es así que en dichos funcionarios se delegan funciones ejecutivas de la administración ..." (Cámara Nac. de Apel. en lo Contencioso Administrativo

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	12 DOGA
Federal, Sala IV, Causa N° 5.313/93, autos "Banco Sindical S.A. - Juan C. Galli, Roberto H. Genfi. c/ B.C.R.A. (Resol. 595/89)", en fallo del 20.08.96).			
<p>Por otra parte, resulta indispensable recordar que el art. 72 de la Ley 20.337 establece que los gerentes "responden ante la cooperativa y los terceros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los consejeros".</p>			
<p>5 - Prueba: En cuanto a la ofrecida por el señor Montedoro cabe expresar lo siguiente: la documental ofrecida a fs. 782, subfs. 12/13 vta. punto 6, subpunto a, tres primeros acápite, fue rechazada por resultar materia ajena al presente proceso y a los hechos imputados. Se hizo lugar a la solicitada a fs. 782, subfs. 13 vta., punto 6, subpuntos a, cuarto acápite, remitiendo la Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras copias de las inspecciones realizadas y los memorandos enviados al Banco de la Ribera Coop. Ltda. durante los años 1992 y 1993 (fs. 946, subfs. 1/599). Se lo tuvo por desistido de la prueba ofrecida a fs. 782, subfs. 13 vta., punto 6, subpunto b, con motivo de no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 5 de la parte resolutive del auto de apertura a prueba (fs. 865). Idéntico ofrecimiento probatorio al del señor Montedoro fue efectuado por el señor Mariani a fs. 783, subfs. 12/13, punto 6, por lo que se hacen extensivas las consideraciones precedentemente expuestas.</p>			
<p>6 - Que, por todo lo expuesto, cabe atribuir responsabilidad a los señores Victorio Humberto MONTEODORO Carlos Alberto MARIANI por los cargos 1 y 2.</p>			
<p>VI - Raúl STIZZA (Consejero titular e integrante de la Comisión de Créditos) y José Ramón CASTRO (Consejero titular e integrante de la Comisión de Créditos).</p>			
<p>1 - Que a los nombrados -cuyos descargos obran a fs. 784, subfs. 1/3 y fs. 785, subfs. 1/3, respectivamente- se les imputan los hechos que configuran los cargos 1 y 2. Sus situaciones se analizarán en forma conjunta en razón de la gran similitud de los argumentos vertidos en sus defensas, sin perjuicio de señalarse las diferencias que cada caso presente.</p>			
<p>Las defensas manifiestan que el Consejo de Administración del Banco de la Ribera Coop. Ltda. había delegado en la Mesa Ejecutiva y en el Comité de Presidencia las funciones de gerenciamiento de la entidad, tras lo cual mencionan su asistencia a reuniones mensuales del Comité de Créditos y su ocasional participación en el citado Consejo, en oportunidades en las que no se trataron los temas objeto del presente sumario, resaltando que el citado órgano de dirección trataba asuntos generales de la vida política e institucional de la entidad pero de ninguna manera temas técnicos como los señalados en los cargos 1 y 2.</p>			
<p>Por lo tanto, niegan haber tenido participación en reuniones en donde se hubieren tratado los mencionados hechos, tras lo cual hacen mención al artículo 74 de la Ley 20337. También ofrecen en calidad de prueba las actas de reuniones en el Consejo de Administración en las que participaron, las que aducen encontrarse radicadas en un juzgado federal de esta Capital Federal, acotando a mayor abundamiento que asistieron a reuniones mensuales de la Comisión de Créditos en donde se trataban préstamos hasta la suma de \$ 200.000, aunque aclaran que en las que estuvieron presentes no fueron consideradas los créditos de las empresas imputadas.</p>			
<p>Consideran que ha sido correcta su actuación en el Consejo de Administración ya que participaban de acuerdo a informes de funcionarios idóneos que eran controlados por la Auditoría Externa e inspecciones de este Banco Central, los cuales eran aceptables "... a tal punto que sirvieron para aprobar la absorción de esta entidad por el BID." (fs. 784, subfs. 1 y fs. 785, subfs. 2).</p>			
<p>De manera particular el señor Castro admite que su participación en la Comisión de Créditos fue óptima porque entiende que empleó sus "... conocimientos profesionales para el otorgamiento de créditos, lo cual me costó mi separación de ese cuerpo en el año 1994, debido a mi posición crítica sobre la manera de otorgar ciertos préstamos y para la cual ofrezco en calidad de prueba el acta respectiva e informe de sindicatura." (fs. 785, subfs. 2).</p>			

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	
<p>2 - Que la circunstancia aducida respecto a la falta de observaciones de la Auditoría Externa e inspecciones realizadas por este Ente Rector, carece de eficacia exculpatoria en virtud de que el deber de controlar la marcha de los negocios sociales, en este caso particular, el regular y normal desarrollo de la actividad financiera, compete siempre a sus autoridades, con prescindencia de las opiniones de cualquier cuerpo societario que actuara en la entidad bancaria.</p> <p>Por otra parte, que haya habido inspecciones no hayan arrojado observaciones que formular, en modo alguno permite afirmar -como pretenden los sumariados- la corrección de los hechos imputados, por cuanto tales hechos pudieron no estar incluidos dentro de los temas relevados en esas ocasiones.</p> <p>No obstante, cabe reparar que la voluminosa documentación acompañada por la Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras referente a las inspecciones realizadas en 1992 y 1993 desdican totalmente sus dichos sobre la ausencia de falencia detectadas, resultando de particular interés lo expresado a fs. 946, subfs. 22: "La política de crédito que viene desarrollando el banco es calificada como riesgosa", como también lo manifestado en providencia del 25.10.93 "... atendiendo la grave afectación de la solvencia que presenta este banco por efecto de la reclasificación de la gran mayoría de los deudores analizados, que determina un incremento sustancial respecto al monto de la cartera irregular informado a este Banco Central, se elevará con urgencia Proyecto de Resolución propiciando exigir al Banco de la Ribera Coop. Ltda. la presentación de un Plan de Regularización y Saneamiento ... por aplicación del artículo 34° de la Ley 21526, según texto Ley N° 24144, por encontrarse afectada la solvencia, comprendiendo ello diversos incumplimientos verificados ..." (fs. 946, subfs. 23).</p> <p>Frente a las argumentaciones vertidas por los sumariados, cabe recordar que: "El estatuto o el reglamento pueden instituir un comité ejecutivo o mesa directiva integrados por consejeros, para asegurar la continuidad de la gestión ordinaria. Esta institución no modifica las obligaciones y responsabilidades de los consejeros" (Ley de Cooperativas N° 20337, art.71).</p> <p>Debe aceptarse como cierta la aludida separación del señor Castro de la Comisión de Créditos en el año 1994 a tenor de la prueba acompañada a fs. 785, subfs. 3/4 y, dado que no se pudo contar con las actas de reuniones del Comité de Créditos que permitan desmentir los dichos de los sumariados Stizza y Castro en el sentido de que no participaron en la aprobación de las financiaciones crediticias imputadas, no se les hará reproche en carácter de partícipes en la primera y tercera faceta del cargo 1 sino como integrantes del Consejo de Administración. Ello así ya que en tal carácter debieron adoptar las medidas necesarias para que el funcionamiento de la ex entidad encuadrara dentro de las prescripciones legales y reglamentarias que rigen la actividad bancaria, quedando comprometidos por las faltas cometidas, sea tolerando los hechos u omitiendo sus obligaciones de contralor.</p> <p>Con respecto a las restantes facetas del cargo 1 -segunda y cuarta-, relacionadas con incorrecciones en la clasificación de deudores lo que llevó a contabilizar un incremento de provisiones por riesgo de incobrabilidad por valor de \$ 3.900 miles y en la información remitida a esta Institución sobre deudores que conformaban grupos económicos, como también a los hechos constitutivos del cargo 2, cabe señalar que la responsabilidad de los sumariados deriva de las atribuciones que como miembros del Consejo de Administración tenían para dirigir y conducir a la entidad bancaria, para lo cual estaban legalmente habilitados para controlar y supervisar que el funcionamiento de la misma se desarrollara con corrección, cumpliendo todas las normas reglamentarias que rigen la actividad financiera. Ello así porque el reproche por tales anomalías deviene de la contrariedad objetiva de la regulación normativa y el daño potencial que de ello deriva.</p> <p>En ese sentido, no surge de los actuados que los imputados Stizza y Castro hayan ejercido sus cargos cumpliendo con los deberes y obligaciones inherentes a las funciones asumidas, accionando de manera tal de promover que la entidad bancaria desarrollara su actividad con apego a las normas de carácter público que la rigen, en razón de lo cual cabe atribuirles responsabilidad por los cargos reprochados.</p> <p>3 - Prueba: En cuanto a la ofrecida por el señor Castro cabe expresar lo siguiente: La documental acompañada a fs. 785, subfs. 3/4, ha sido evaluada convenientemente. La ofrecida a fs. 784, subfs. 1, se lo tuvo</p>			

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	14 1093
----------	--	---------

por desistida con motivo de no haber cumplido con lo dispuesto en el punto 3 de la parte resolutive del auto de apertura a prueba (fs. 865). La documental ofrecida por el señor Stizza (fs. 784, subfs. 1) ha sido analizada en el auto de apertura a prueba (ver fs. 863, punto 6, subpuntos d); se lo tiene por desistido del ofrecimiento probatorio consistente en copias de actas de reuniones del Consejo de Administración del Banco de la Ribera Coop. Ltda. (ver fs. 948, segundo Considerando), resultando indiferente la prueba consistente a los formularios de tratamiento de los créditos mencionados en el informe acusatorio atento a que se tiene por cierta su falta de participación en el otorgamiento de los créditos imputados ya que su responsabilidad deviene de la omisión de sus deberes como consejero titular.

4 - Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde atribuir responsabilidad a los señores Raúl STIZZA y José Ramón CASTRO por los cargos 1 y 2, en razón del desarrollo omisivo de las funciones a su cargo.

VII - Juan CALLARAMI (Consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva, del Comité de Presidencia y de la Comisión de Planificación y control), **Oscar Alfredo MURRI** (Consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva y del Comité de Presidencia), **Eduardo Luis TRAVERSO** (Consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva y del Comité de Créditos) y **Augusto Felipe STRAPPA** (Consejero titular e integrante de la Comisión de Planificación y control).

1 - Que a los nombrados se les imputan los hechos configurantes de los cargos 1 y 2; los tres primeros nombrados dedujeron única defensa (fs. 793, subfs. 1/10) y la del último se encuentra glosada a fs. 814, subfs. 1/12. En sendas presentaciones se formulan idénticos argumentos, situación que torna conveniente analizar sus situaciones en forma conjunta, sin que ello impida señalar las particularidades que hagan a cada caso.

Aluden, en primer término, a la naturaleza cooperativa de la ex entidad y a la necesidad de interpretar las normas administrativas en ese contexto, destacando que los bancos cooperativos carecen de un management profesional, sino que el mismo tiene un carácter "mutualista y democrático" (fs. 793, subfs. 4 y fs. 814, subfs. 4).

En lo que atañe a la ponderación del riesgo crediticio, manifiestan que los cargos fueron incorrectamente formulados por estar sustentados en una normativa no vigente al momento de los hechos, dado que entienden que la Comunicación "A" 2216 entró en vigencia el 31.12.94, destacando más adelante que en la mayoría de los casos mencionados en la imputación, se trata de nuevos desembolsos o sucesivas renovaciones correspondientes a operaciones crediticias preexistentes para lo cual mencionan el caso Pueblo Antiguo S.A., el que aseguran que contaba con una hipoteca de alto valor de realización que aseguraba la efectiva recuperación de los capitales prestados.

A continuación, aluden al tema inherente al suministro de información distorsionada y sostienen que dicha incriminación es dogmática pues carece de sustento alguno en los hechos, comentando que no puede atribuírseles el acto doloso de deformar "... la información sobre los créditos ponderados, a fin desviar la fiscalización del B.C.R.A.", pues comentan que "... obraron técnicamente aconsejados, y con sustento en constancias documentales que concordaban con las conclusiones que en cada caso se adoptaron." (fs. 793, subfs. 7 y fs. 814, subfs. 7).

En materia de capitales mínimos, indican haber obrado acorde a las normas y guiados por el asesoramiento de equipos técnicos y debidamente visados por la Auditoría Externa, comentando además que durante el lapso materia de examen el banco fue dos veces inspeccionado por equipos de este Ente Rector, quienes revisaron y controlaron con particular minucia el tema de capitales mínimos el que no mereció objeción alguna. Luego destacan que "ni bien la auditoría externa puso en conocimiento de la dirección del banco la necesidad de perfeccionar los sistemas existentes, se instrumentaron todos los cambios necesarios." (fs. 793, subfs. 8 y fs. 814, subfs. 8).

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	15 10/94
<p>Bajo el título "Los factores de incriminación" refieren sobre la falta de magnitud de las conductas imputadas, como así también al hecho de no haber obtenido beneficio alguno, ni haber ocasionado perjuicio a terceros; finalmente efectúan expresa reserva de la cuestión federal.</p>			
<p>2 - Que no puede aceptarse la comisión de conductas en infracción a la normativa financiera al amparo del carácter mutualista de una entidad cooperativa, como tampoco a la carencia de una dirección profesional, teniendo en cuenta la trascendencia de la actividad bancaria. Ello así dado que "La índole de la actividad bancaria y su importancia económica y social es la que se halla en la base de las exigencias contenidas en las normas legales respectivas; las "personas" o "entidades" que se dedican a ello saben con antelación que se encuentran sujetas a un así llamado poder de policía bancario cuyo debido sustento contractual ha sido admitido por la jurisprudencia en numerosos precedentes" (Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 22.03.85, "Viplace S.A. c/ Banco Central de la República Argentina").</p>			
<p>Asimismo, al respecto se ha dicho que el bien jurídico tutelado por el régimen sancionatorio que prevé la Ley 21526 es la preservación de la política monetaria del Estado y, subsecuentemente, el orden económico nacional a través del buen funcionamiento del mercado financiero (Barreira Delfino, Eduardo A., "Banco Central de la República Argentina-Carta Orgánica Ley 24144 reformada por la ley 24485" Ed. 1995, p. 238).</p>			
<p>El planteo referido a la no vigencia de la Comunicación "A" 2216 al momento de los hechos reprochados, merece ser desestimado ya que la misma dispone su entrada en vigencia a partir de junio de 1994 y que los deudores de las entidades financieras se debían clasificar conforme a las normas contenidas en su Anexo.</p>			
<p>Con respecto al otorgamiento de créditos derivados de operaciones preexistentes y al caso Pueblo Antiguo S.A., cabe remitirse a lo ya manifestado en los puntos 2 y 3.1 de los Considerandos IV y V, respectivamente, donde se examinó este aspecto de manera exhaustiva. En cuanto al tema de capitales mínimos, los sumariados no aportan ningún elemento eximente de responsabilidad, limitándose tan sólo a indicar la falsedad de la imputación lo que a estarse de las probanzas de autos carece de entidad exculpatoria. Además sus dichos con relación a la falta de observaciones por parte de las inspecciones de este Ente Rector resultan desmentidos a poco que se repare en lo establecido en el Memorando de conclusiones con fecha de estudio al 31.05.93, punto 1.6, fs. 946, subfs. 26/7). Inherente a la falta de magnitud de las conductas imputadas como a la ausencia tanto de beneficios como de perjuicio a terceros, corresponde estarse a lo expuesto en tal sentido en el Considerando V, punto 3.</p>			
<p>No existe duda que la participación de los sumariados Callarami y Murri en la Mesa Ejecutiva, Comité de Presidencia, del señor Traverso -quien además de haber integrado dicho cuerpos societarios, también desempeñó tareas en el Comité de Créditos- y del señor Strappa como consejero titular, ha sido necesaria para el funcionamiento normal y habitual de los cuerpos colegiados que tomaban las decisiones de la entidad bancaria. Ello quiere significar que lo relevante era integrar el Consejo de Administración, la Mesa Ejecutiva y el Comité de Créditos, no de manera nominal o formal, sino acreditada por la realización de las conductas que, adoptadas por quienes conformaban la voluntad social, se tradujeron en proceder que le dieron contenido a las irregularidades tratadas en el presente sumario.</p>			
<p>Por lo tanto, se advierte que los sumariados asumieron obligaciones que no cumplieron legalmente y que posibilitaron la comisión de todos los hechos infraccionales acreditados en el Considerando I, razón por la cual les cabe responsabilidad. La posición que ocupaban los sumariados aquí examinados dentro del Consejo de Administración y de la Mesa Ejecutiva resulta similar a la de los prevenidos analizados en los Considerandos II, IV y V, por lo tanto es de aplicación lo allí expuesto a donde se reenvía en homenaje a la brevedad.</p>			
<p>No corresponde a esta instancia expedirse sobre la reserva de la cuestión federal.</p>			

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	16/10/95
----------	--	----------

3 - Prueba: se los tuvo por desistidos de la prueba de la instrumental ofrecida (fs. 793, subfs. 10, punto 4, subpunto a) y (fs. 814, subfs. 10, punto 4, subpunto a), con motivo de no haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de la parte resolutive del auto de apertura a prueba (fs. 865), no habiéndose hecho lugar a la testimonial ofrecida a fs. fs. 793, subfs. 10, punto 4, subpunto b y a fs. 814, subfs. 10, punto 4, subpunto b, por las causas de denegación expuestas a fs. 864, punto 7, subpuntos c y d, en razón del ofrecimiento como testigos a funcionarios de este Banco Central.

4 - Que, en virtud de todo lo expuesto, cabe atribuirles responsabilidad a los señores Juan CALLARAMI, Oscar Alfredo MURRI, Eduardo Luis TRAVERSO y Augusto Felipe STRAPPA por las transgresiones 1 y 2 imputadas.

VIII - Esteban Enrique MARTIN (Sindico titular).

1 - Que al mencionado se le imputan los hechos configurantes de los cargos 1 y 2; presentó su descargo a fs. 855, subfs. 1/12.

En su defensa plantea -de manera preliminar- su desaprobación al sistema instrumentado por la Ley 21526 y sus modificatorias. Seguidamente hace expresa reserva del caso federal y opone excepción de litispendencia, en virtud de la existencia de una investigación simultánea de los mismos hechos, por parte de este Banco Central y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, Secretaría N° 21.

Niega cada una de las conductas imputadas como también autenticidad de la documentación agregada al expediente; hace mención al "efecto tequila" acontecido durante el período infraccional y a su desconocimiento y falta de participación en los hechos infraccionales, comentando que tenía a su cargo el control de legalidad de los actos y si bien no le era ajeno el control de la gestión, su fiscalización podía llegar a la observación pero no contando con el poder de veto, no podía en ningún caso entorpecer la marcha de la administración.

Destaca que la Sindicatura no tiene participación en la información mensual sobre el estado de la cartera sino que su tarea se limitaba a la consideración de los informes trimestrales que arrojaba la Auditoría Externa, manifestando que su opinión sobre el particular surge del informe anual realizado al cierre del Balance General al 31.12.93 -en cuyo punto II se trata el tema acerca del alcance de la tarea- que reproduce.

También expone textualmente párrafos del informe del auditor externo que constituye, según interpreta, la base del emitido por la Sindicatura y guarda estrecha vinculación con los cargos imputados, expresando luego que durante su gestión no dejó de formular las observaciones que el cargo le permitía, llegando a niveles de enfrentamiento con los miembros del Consejo de Administración, para lo cual cita actas de reuniones de la Mesa Ejecutiva, del Consejo de Administración, y de la Sindicatura. También manifiesta que a los pocos días de aprobarse la fusión, en la Asamblea de accionistas realizada el 10.02.95, expuso observaciones que constituyeron -según entiende- las reales causas que determinaron el proceso de fusión.

2 - Que no cabe hacer lugar al planteo de litispendencia, merced a los siguientes argumentos jurisprudenciales: "Que la actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de las otras de carácter comercial y se caracteriza por la necesidad de ajustarse a disposiciones y al control del Banco Central, una de cuyas funciones es aplicar la ley de bancos y vigilar su cumplimiento; por lo tanto, las sanciones que esta institución puede aplicar tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal" (conf. C.S. Fallos, 241:419, 251:343, 268:91, 275:265, entre otros).

En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, in re "Álvarez, Celso Juan y otros c/ Resolución N° 166 del Banco Central s/ Apelación (Expte. N° 101.167/80, Coop. Sáenz Peña de Créd. Ltda.)", fallo del 23.04.85, Causa N° 6.208, ha señalado que "... media sustancial diferencia entre la responsabilidad penal y la administrativa surgida de los mismos hechos, lo que autoriza un diferente juzgamiento por dos jurisdicciones diferentes ... La decisión en sede penal para nada puede menguar la legitimidad del acto administrativo sancionador ... El ejercicio de la potestad sancionadora es administración y el de la potestad criminal es justicia ...".

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	17. 10/96
<p>No puede aceptarse que se pretenda negar la autenticidad de la documentación adjunta al expediente, debiendo recordarse que la jurisprudencia tiene resuelto que: "Tampoco puede soslayarse que las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que refieren en tanto no hayan sido argüidas de falsedad (conf. art. 979, inc. 2º C. Civil) y que en todo caso como documento público tiene valor probatorio mientras no se demuestre su inexactitud. Además, las presuntas deficiencias en el trámite administrativo no importan violación al derecho de defensa, no sólo porque los cargos analizados ... versan sobre los mismos hechos incluidos en la incriminación inicial, sino porque además, aquéllas tuvieron ocasión de subsanarse en esta instancia judicial (C. S. Fallos: 267:393, 273:134, 292:153, 300:1047; 305:831)." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, sentencia del 14.09.99, Expte. N° 11.072/96, autos "Banco Multicredito S.A. y otros c/B.C.R.A. - Resol. 477/97- Sum. Fin. 865").</p> <p>Con respecto a las consideraciones que efectúa sobre las funciones a cargo de la sindicatura, menoscabando la relevancia de las mismas, cabe tener lo establecido en el puntos j del artículo 76 del Estatuto Social del Banco de la Ribera Coop. Ltda., con respecto a las atribuciones conferidas a la Sindicatura para velar que "... el Consejo de Administración cumpla la ley, el Estatuto, el Reglamento y las resoluciones asamblearias" (fs. 19).</p> <p>No resultan aceptables las alusiones formuladas en el sentido de los informes de la Auditoría Externa constituyeran la base de los emitidos por la Sindicatura, dado que los roles que ambos órganos desempeñaban en el banco eran disímiles, como también lo eran las normas reglamentarias bajo las cuales debían someter sus cometidos. En ese sentido, merece repararse que la sindicatura es una institución específicamente legislada en la Ley 19550 con características distintivas, más amplias que las de la Auditoría Externa, sujeta a los preceptos de la Circular CONAU I, "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas". Mientras que el síndico es el encargado por la ley de fiscalizar de modo constante y eficiente la actuación del Directorio, la específica labor del auditor externo se basa sólo por lo que expresa en su dictamen con relación a los estados contables de la entidad, en donde explica la amplitud de su tarea y fija los límites de la responsabilidad que asume.</p> <p>Debe tenerse en cuenta lo que surge del acta N° 317 del 07.11.1994 que plasma lo ocurrido en la reunión del Consejo de Administración (fs. 559/63) de la que se extrae en forma elocuente las observaciones formuladas por el síndico Martín con respecto a la Comisión de Créditos, y en la que solicitó se controle la idoneidad de sus integrantes "... y la faz administrativa de dicho Departamento como así también el funcionamiento de la misma" (fs. 562 vta. último párrafo). En razón de lo expuesto deben tenerse sus dichos con relación a las aludidas discrepancias como ciertos, pero tampoco debe dejarse de ponderar que dichas expresiones resultan extemporáneas dado que los procedimientos irregulares en la órbita de la Comisión de Créditos ya habían sucedido, para lo cual cabe remitir al Considerando I, puntos 1.2 a 1.6 donde se analizaron exhaustivamente los hechos antirreglamentarios que dieron lugar al cargo 1, los que tuvieron lugar al 31.08.94 y al 30.09.94.</p> <p>Los cargos incriminados tuvieron lugar en el período en que el señor Martín se desempeñó como síndico, y, si bien no consta que haya intervenido en esas conductas, el deber de control y fiscalización inherente a esa función compromete su responsabilidad. Ello así por cuanto debía vigilar que la actividad de la entidad bancaria se desarrollara dentro de la normativa que la rige, incluso controlando la legalidad de las decisiones adoptadas por el órgano de gestión. Las constancias de autos evidencian que éste ejerció las funciones asumidas sin preocuparse por cumplir acabadamente con los deberes y obligaciones inherentes a ellas, cabiéndole en razón de lo expuesto, responsabilidad por los cargos 1 y 2 que se le reprochan.</p> <p>En lo atinente a la reserva del caso federal, no corresponde a esta instancia expedirse al respecto.</p> <p>3 - Prueba: fue debidamente evaluada la instrumental acompañada a fs. 855, subfs. 13/53, como también la detallada a fs. 855, subfs. 11 vta., punto VIII, subpuntos a, consistente en el libro de actas de Sindicatura N° 1, que corre por cuerda separada y consta de 300 fojas útiles, utilizadas hasta el folio 245 (ver fs. 855, subfs. 12 vta.). La informativa ofrecida a fs. 855, subfs. 11 vta., punto VIII, subpuntos b, fue proveída</p>			

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	18 2097
<p>favorablemente a fs. 864 y habiendo estado a su cargo la producción de la misma, resultó imposible de producir luego de infructuosas gestiones realizadas (fs. 948). La testimonial peticionada a fs. 855, subfs. 11 vta./2, punto VIII, subpuntos c, fue rechazada por no haber acompañado los pertinentes interrogatorios (ver fs. 864, punto 7, subpuntos e).</p>			
<p>4 - Que, por todo lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad al señor Esteban Enrique MARTIN por los cargos 1 y 2.</p>			
<p>IX - Juan Carlos PAPA (Consejero titular e integrante de la Mesa Ejecutiva), José QUAGLIA (Consejero titular e integrante de la Comisión de Créditos) y Luis LEGGERI (Consejero titular e integrante de la Comisión de Planificación y control), y Mario Carlos FLEGO, José CROCCO, Miguel Sebastián CAPRIDI y Francisco Orlando GULIAS (Síndicos titulares).</p>			
<p>1 - Que a los nombrados se les imputan los hechos configurantes de los cargos 1 y 2, efectuándose un tratamiento conjunto en atención a que, no obstante haber sido debidamente notificados, no presentaron descargo, por lo cual sus conductas serán evaluadas en base a los elementos de juicio obrantes en el expediente y sin que su inacción procesal constituya presunción en su contra.</p>			
<p>Los señores Quaglia, Leggeri, Crocco, Gulias y Capridi fueron notificados de la apertura del presente sumario, tal como surge de los avisos de recibo obrantes a fs. 763/4, fs. 749, fs. 755, fs. 823 y fs. 825/27, sin que se presentaran a tomar vista de las actuaciones. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta las infructuosas gestiones realizadas (fs. 743, fs. 797, fs. 803/04, fs. 806/07, fs. 830/38 y fs. 842/44) se procedió a publicar edictos conforme surge de fs. 856. Respecto de los señores Flego y Papa, debe tenerse en cuenta que a pesar de todas las gestiones llevadas a cabo a los efectos de la obtención de su domicilio (fs. 744, fs. 747, fs. 795/96 y fs. 800/02), las mismas fueron infructuosas, por lo que debieron también ser notificados por edicto (fs. 856).</p>			
<p>2 - Que el señor Papa ejercía la función de integrante de la Mesa Ejecutiva dentro del Consejo de Administración en la época en que las infracciones fueron cometidas por el Banco de la Ribera Coop. Ltda. sin que éste accionara para evitar las irregularidades o revertirlas en cumplimiento de las normas específicas. Por lo tanto, su posición dentro del Consejo de Administración revela una actitud negligente que le acarrea responsabilidades en base a las consideraciones formuladas en los punto 2 y 3.1 de los Considerandos II y V, respectivamente, y a la jurisprudencia citada en el punto 3 del Considerando V, a los que corresponde remitir.</p>			
<p>Los prevenidos Quaglia y Leggeri -al igual que los señores Stizza y Castro, cuyas situaciones se examinaron en el Considerando VI- se desempeñaron en la Comisión de Créditos y, atento a que no se han podido acompañar las actas de reuniones de dicho cuerpo correspondientes a la época de comisión la primera y tercera faceta del cargo 1, no puede comprobarse que hayan intervenido personalmente en su consumación, pero de los resultados de su gestión no puede inferirse que hayan cumplido con los deberes y obligaciones inherentes a la función asumida como consejeros titulares. Por el contrario, su posición dentro del Consejo de Administración revela una actitud negligente que les acarrea responsabilidades en base a las consideraciones formuladas en el punto 2 del Considerando VI a donde se remite. Los hechos configurantes del cargo 2 y de las restantes facetas del cargo 1 (segunda y cuarta), tuvieron lugar en el lapso en se desempeñaron dentro de Consejo de Administración; esa circunstancia les ocasiona responsabilidad en virtud de lo expuesto en el mencionado Considerandos VI, punto 2, debiendo destacarse que "un defectuoso contralor respecto a los créditos acordados, y una imprudente administración en cabeza de funcionarios carentes de capacidad técnica calificada, quedó configurada no sólo por la existencia de concentración de la cartera de deudores, sino también por el otorgamiento de créditos a empresas y/o personas sin el correspondiente respaldo de las garantías legales exigidas, además, de un incorrecto seguimiento de las registraciones volcadas en los legajos de créditos" (Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 08.02.96, - Banco Central de la República Argentina en Banco de Intercambio Regional S.A. en liquidación - instrucción de sumario - Causa: 21.977).</p>			

B.C.R.A.	Referencia Exp. N° Act.	100.290/97	19 4098
----------	-------------------------------	------------	---------

En orden a determinar la responsabilidad de los imputados Flego, Crocco, Capridi y Gúlias, deberá estarse a lo manifestado en el Considerando VIII precedente respecto de las obligaciones a cargo de quienes se desempeñan en la Sindicatura, el cual cabe tener por reproducido.

Asimismo, cabe recordar que la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, con fecha 13.07.95, en autos "DAR S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda y otros Inmuebles e/liq. c/ Banco Central de la República Argentina" ha manifestado que "... es la naturaleza de la actividad y su importancia económico social lo que justifica el grado de rigor con que debe ponderarse al comportamiento de quienes tienen definidas obligaciones o incumbencias en la dirección y fiscalización de las entidades financieras." (Considerando 12°, confr. esta Sala "Credibono", del 13/7/95)." (Documento Lexis N° 8/6580).

3 - Que, por todo lo expuesto, cabe atribuirle responsabilidad por los cargos 1 y 2, a los señores Juan Carlos PAPA, José QUAGLIA y Luis LEGGERI con motivo del desarrollo de sus tareas dentro del Consejo de Administración del Banco de la Ribera Coop. Ltda., y a los señores Mario Carlos FLEGO, José CROCCO, Miguel Sebastián CAPRIDÍ y Francisco Orlando GULIAS, por su desempeño como síndicos de la citada entidad.

X - CONCLUSIONES

1 - Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21.526, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias y formas de su participación en los ilícitos. Atento a la entidad y magnitud del cargo, así como el grado de participación en los ilícitos, es pertinente sancionar a los encartados con la sanción prevista en los incisos 3) y 5) del artículo 41 de la ley N° 21526.

Para la graduación de la sanción se tiene en cuenta la Comunicación "A" 3579.

2 - Que la Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la S.E.F.y C. ha tomado la intervención que le compete.

3 - Que de acuerdo con las facultades conferidas por el art. 47, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aclarado en sus alcances por el Decreto 13/95, el cual fue puesto en vigencia por la ley 25780, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS
RESUELVE:

1- No hacer lugar al planteo de litispendencia efectuado por el señor Esteban Enrique Martín, por las razones expuestas en el precedente punto 2 del Considerando VIII.

2- Rechazar la prueba pericial caligráfica pedida a fs. 780, subfs. 2 vta., punto VII, subpuntos c y la ofrecida a fs. 941. subfs. 2 y subfs. 21/29; la solicitada a fs. 782, subfs. 12/3 VTA., punto 6, subpuntos a, tres primeros acápites y fs. 783, subfs. 12/3, punto 6, subpuntos a, tres primeros acápites; la testimonial ofrecida a fs. 793, subfs. 10, punto 4, subpuntos b y a fs. 814, subfs. 10, punto 4, subpuntos b; y la testimonial pedida a fs. 855, subfs. 11 vta./2, punto VIII, subpuntos c, por las razones expuestas en los Considerando III, punto 3; Considerando V, punto 5; Considerandos VII, punto 3; y Considerando VIII, punto 3, respectivamente.

3- Imponer las siguientes sanciones en los términos de los incisos 3° y 5° del artículo 41 de la ley 21526:

-A cada uno de los señores Hugo Antonio PIRE (L.E. 4.681.831), Juan CALLARAMI (L.E. 6.142.128), Oscar Alfredo MURRI (L.E. 4.681.457), Victorio Humberto MONTEDORO (L.E. 6.098.060), Eduardo Luis TRAVERSO (D.N.I. 4.733.001), Sergio Luis SZUCHMAN (D.N.I. 10.311.163), Juan Carlos

B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 100.290/97 Act.	20 4099
----------	--	--	---------

PAPA (L.E. 4.746.247) y Carlos MARIANI (D.N.I. 11.705.914): multa de \$ 1.040.000 (pesos un millón cuarenta mil) e inhabilitación por 4 (cuatro) años.

- A cada uno de los señores Raúl STIZZA (L.E. 6.074.733), José CASTRO (D.N.I. 11.803.859), José QUAGLIA (D.N.I. 11.483.425), Luis LEGGERI (D.N.I. 11.515.101), Augusto STRAPPA (L.E. 4.671.255) y Juan TOMAT (D.N.I. 14.831.162): multa de \$ 520.000 (pesos quinientos veinte mil).


- A cada uno de los señores Esteban Enrique MARTÍN (D.N.I. 13.689.405), Mario Carlos FLEGO (D.N.I. 6.002.640), Ricardo José CROCCO (D.N.I. 6.139.021), Miguel Sebastián CAPRIDÍ (L.E. 4.651.234) y Francisco Orlando GULIAS (L.E. 4.689.626): multa de \$ 416.000 (pesos cuatrocientos dieciséis mil).

4- El importe de las multas mencionadas deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas - Multas - Ley de Entidades Financieras - Artículo 41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley 21.526.

5- Hágase saber a los sancionados que la sanción de multa es apelable únicamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los términos del art. 42 de la Ley 21.526.

6- Notifíquese con los recaudos que establece la Sección 3 de la Comunicación "B" 9239 del 08.04.08 - B.O. 02.05.08 - (antes Comunicación "A" 4006 del 26.08.03), circular RUNOR 1-545, en cuanto al régimen de facilidades de pago oportunamente aprobado por el Directorio, por el cual podrán optar - en su caso - los sujetos sancionados con la penalidad prevista por los inc. 3° del artículo 41 de la Ley N° 21526 y modificatorias.

7- Hágase saber a los sumariados con sanción de multa que ésta únicamente podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en los términos del artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras.



CARLOS D. SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES
FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

40/11